

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA CON OCASIÓN DE LA CONFERENCIA DE REVISIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

DEBATE GENERAL

Kampala, Uganda, 1 de junio de 2010

Señor Presidente

Mi delegación desea expresarle a usted y al Estado de Liechtenstein su reconocimiento por la excelente labor desplegada en la conducción de las actividades indispensables para el desarrollo de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los notables progresos alcanzados durante su gestión. Mi reconocimiento también al Presidente de la Corte, Juez Sang-Hyun Song, al Fiscal Luis Moreno Ocampo, a la Vice Fiscal ... y a la Secretaria Silvana Arbia por su trabajo destacado a favor de la lucha contra la impunidad de los crímenes atroces. De otra parte deseo agradecer al gobierno de Uganda por la hospitalidad y por la organización de esta importante Conferencia.

Quisiera destacar también el importante papel que han llevado a cabo las diferentes organizaciones de la sociedad civil en la preparación de la Conferencia mediante la elaboración de documentos, la celebración de reuniones y la organización de visitas a comunidades afectadas por la violencia. Su trabajo le ha dado y, seguro le dará una especial vitalidad a las discusiones.

Señor Presidente

Colombia ha participado de forma continua y decidida en el empeño librado por la comunidad internacional con miras a penalizar los crímenes que lesionan la dignidad humana, con la convicción de que la prevención, investigación y sanción de los crímenes más graves que afectan a la humanidad en su conjunto resulta un presupuesto básico para asegurar el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Inspirados en ese propósito concurrimos a la Conferencia de Plenipotenciarios que dio vida a la Corte Penal Internacional como institución judicial independiente y permanente, ratificamos el Estatuto de Roma a escasos meses de su entrada en vigor; participamos activamente en las sesiones de las Comisiones preparatorias y, luego de instalada la Corte, en los grupos de trabajo establecidos con el objeto de desarrollar o aplicar disposiciones de ese instrumento internacional.

Renovamos nuestro compromiso y respaldo a la labor de la Corte Penal Internacional y a la universalidad e integridad del Estatuto de Roma. Igualmente reafirmamos nuestra voluntad de proseguir en el esfuerzo común para erradicar la impunidad y en ese derrotero hemos adelantado esfuerzos ingentes, con resultados importantes sobre la base del principio de complementariedad, que se revelan, entre otros, en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz que ha permitido la desmovilización de más de 50,000 personas y la judicialización de cientos de integrantes de los denominados grupos de autodefensa así como de los grupos guerrilleros, muchos de ellos con pliegos de cargos y varios en juicio, al tiempo que se avanza en la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Hay más de 280,000 víctimas inscritas para participar en los procesos judiciales y de reparación administrativa, y cerca de 11,000 familias han recibido reparaciones administrativas. El presupuesto nacional para reparaciones de víctimas este año asciende a 150 millones de dólares.

Como lo hemos expresado en oportunidades precedentes, Colombia atribuye especial importancia al principio de complementariedad y ve en él la expresión máxima de la efectividad de la Corte Penal Internacional pues, son los Estados los primeros llamados a ejercer justicia para investigar y juzgar a los perpetradores de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Es precisamente en el fortalecimiento de las jurisdicciones nacionales y en consecuencia, en la lucha contra la impunidad, en donde la Corte Penal Internacional puede maximizar su impacto. En ese sentido, respalda el papel de la complementariedad positiva con el fin de alentar a los Estados a cumplir con su responsabilidad primaria de investigar y procesar los crímenes de competencia de la Corte. En esta dirección la Fiscalía de la Corte Penal ha llevado a cabo una importante y estimulante tarea con relación a Colombia.

El Gobierno que me honro en representar ha mantenido y seguirá manteniendo una fluida y respetuosa relación de cooperación con la Corte en el convencimiento de que existe un interés común de luchar contra la impunidad de los crímenes atroces.

En su proceder, la Corte ha obrado con rigor, imparcialidad e independencia, todo lo cual auspicia la voluntad de ratificación de los Estados que aún no son parte del Estatuto de Roma y, a su vez, contribuye a disuadir a potenciales perpetradores de crímenes graves de trascendencia internacional.

Señor Presidente,

Nuestra delegación estima de especial significado el ejercicio de balance (stocktaking) como una oportunidad valiosa para que los Estados, las víctimas, la

sociedad civil y la Corte misma podamos reflexionar, a pocos años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en torno al cometido de la Corte Penal Internacional y en esa perspectiva, se obtengan resultados que puedan servir de derrotero para el camino que resta por recorrer.

Como contribución de Colombia al ejercicio de balance hemos preparado dos documentos: uno sobre justicia transicional en Colombia como una experiencia de verdad, justicia y reparación, y el otro, un folleto sobre los cuatro temas del ejercicio de balance que incluye los compromisos de Colombia en esta Conferencia. Asimismo, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia ha preparado un documento sobre su trabajo en materia de víctimas; la Organización de los Estados Americanos otro sobre su contribución al proceso de justicia transicional en Colombia, y; la Unión Europea un tercer documento sobre su aporte al fortalecimiento de la justicia nacional.

En relación con los temas de complementariedad y cooperación, Colombia respalda de tiempo atrás y continuará respaldando el mecanismo de respuesta de justicia rápida (Justice Rapid Response Mechanism) coordinado actualmente por Canadá y cuya Secretaría es ejercida de manera ejemplar por la organización No Peace Without Justice.

Señor Presidente

Guiados por el firme compromiso de alcanzar la universalidad del Estatuto de Roma y fortalecer el sistema de justicia internacional con miras a erradicar la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia internacional, otorgamos especial importancia al consenso como la vía natural y deseable para la adopción de cualquier decisión en el marco de esta histórica Conferencia de Revisión, como una expresión sine qua non del respaldo unívoco de los Estados Parte aquí reunidos a la labor de la Corte Penal Internacional.

Las condiciones que permitieron que los Estados aquí presentes nos uniéramos al consenso internacional alrededor del Estatuto de Roma, deberían preservarse para que otros Estados procedan en consecuencia. En esa perspectiva, la declaración contenida en el artículo 124 se revela como un instrumento de particular importancia que presta su servicio a favor de la universalidad del Estatuto.

Señor Presidente,

Respaldamos la labor del Grupo de trabajo sobre el crimen de agresión que durante estos años promovió un desarrollo substantivo en torno a una tipificación del

crimen de agresión, el ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional al respecto y la entrada en vigor de la respectiva enmienda. Colombia ha participado activamente en este proceso porque reconoce la importancia de desarrollar este crimen en el Estatuto. En ese ámbito, hemos señalado que si bien es preciso salvaguardar el régimen de frenos y contrapesos del sistema internacional, la Corte no debería estar, en principio, supeditada a órganos de naturaleza política para ejercer la labor que como ente judicial autónomo le corresponde.

Las deliberaciones sobre el tema de agresión durante esta Conferencia deben estar guiadas por un espíritu de consenso con miras a afianzar la universalidad del Estatuto y en consecuencia contribuir al fortalecimiento de la Corte.

De otra parte, Colombia respalda igualmente la iniciativa de la delegación belga en relación con la ampliación de la prohibición del uso de ciertas armas en los conflictos armados no internacionales y manifestamos desde ya nuestro respaldo.

Señor Presidente,

Como parte de los compromisos de Colombia durante esta Conferencia, mi delegación se permite anunciar que en los próximos meses, el Gobierno Nacional iniciará el proceso tendiente a la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley de cooperación con la Corte, como una muestra más de nuestro compromiso con el Estatuto y su plena aplicación. Esta Ley complementará la norma ya incorporada en el Código de Procedimiento Penal relativa al deber de cooperación de Colombia con la Corte.

Adicionalmente, y aunque no hace parte formal de los compromisos de Colombia durante esta Conferencia, el Gobierno Nacional está desarrollando un proceso de coordinación interinstitucional con la expectativa de lograr una decisión que permita la negociación de un acuerdo de ejecución de sentencias de la Corte. Así mismo está avanzando en la posibilidad de hacer una contribución al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la Corte.

Señor Presidente,

Finalmente, mi delegación desea reiterar su plena cooperación en el desarrollo de la Conferencia de Revisión, renovar su adhesión a los principios que informan el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, anunciar su pleno concurso para el logro de los objetivos propuestos para este histórico evento.

Gracias Señor Presidente



Libertad y Orden
República de Colombia

Colombia and the stocktaking exercise of the ICC

> Colombia's Justice and Peace Process



Former High Peace Commissioner Luis Carlos Restrepo receives weapons during a demobilization event in Remedios, Antioquia. December 12, 2005.

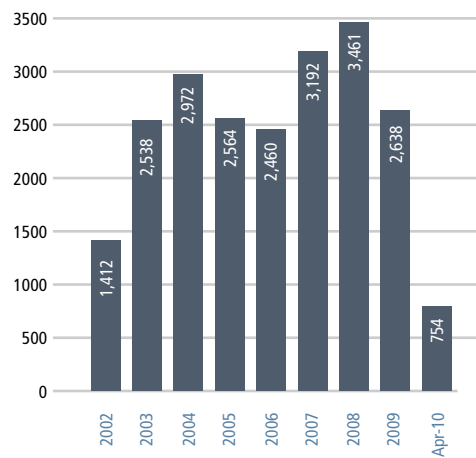


The Colombia Criminal Accusatory System came into effect in January 2005.

Colombia is currently in a transitional justice process based on the Justice and Peace Law. Its purpose is: i) to achieve the demobilization, disarmament and reintegration of illegal armed groups; ii) to conduct criminal investigations and prosecutions against leaders of these groups that are responsible for committing serious crimes, and; iii) to recognize and make effective the rights of victims to truth, justice and reparation.

Five years after the adoption of the Law, Colombia can show important results: i) around 50,000 demobilized individuals; ii) over 18,000 weapons given up and destroyed; iii) the main leaders of the self-defense groups and their accomplices behind bars awaiting trials; iv) more than 280,000 people recognized and registered as victims; v) more than 36,000 criminal actions, previously unknown, being investigated.

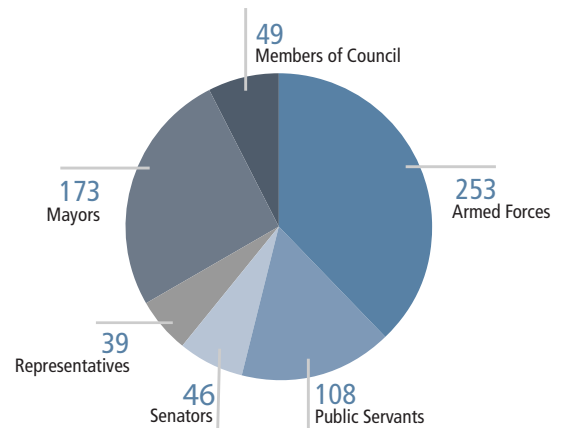
Individual Demobilization



In addition to 31,671 collective demobilization

Source: Ministry of Defense.

Other persons investigated under the ordinary jurisdiction as a result of the justice and peace process (without benefits).



Source: Office of the Prosecutor General.

Confessions made during the criminal proceedings have led to the exhumation of 3,131 bodies of victims. 908 of them have been identified through DNA tests and have been handed to their families.



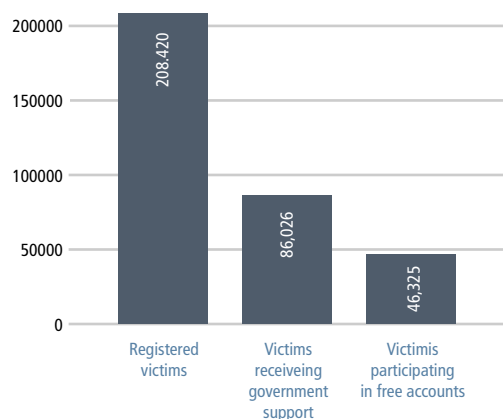
> Impact on Victims and Affected Communities



The National Commission for Reparation and Reconciliation is providing support to victims nationwide.

Colombia's National Commission for Reparation and Reconciliation is responsible for ensuring victim's rights to truth, justice and reparation. The Commission is an independent institution composed of representatives of the State, civil society and victims that deals with 5 aspects: i) reparation and attention to victims, ii) reconciliation, iii) demobilization, disarmament and reintegration, iv) historical memory and v) specific populations and gender.

Together with the Office of the General Prosecutor, the Commission has organized more than 380 outreach and support sessions throughout the country for more than 86,000 victims.



Source: Office of the Prosecutor General.

Administrative Reparations Program

In addition to judicial reparations, victims can access a faster and simpler reparations program in order to obtain compensation. It just requires filing a form without the need of being represented by a lawyer. In a maximum of 18 months a reparations committee shall decide on the request. In 2009 more than 11.000 families were granted compensation for an estimated USD\$100 millions. The budget for 2010 is USD\$150 millions.

Administrative Reparations 2009 (In addition to judicial reparations)

Budget	\$100 USD million
Beneficiaries	11,000 families
Reparation to victims of sexual abuse	70
Reparation to children forcibly recruited	550
Reparation to victims of anti-personnel landmines	1,300

National Reparation and Reconciliation Commission.

Historical Memory

Historical memory is a fundamental element of a retrospective and restorative justice. It requires integrating memories from all sources, not only from the participants of the acts of violence in Colombia, but most importantly, from the victims. To this end, 10 investigations about emblematic cases of violations of human rights and International Humanitarian Law are in the process of being published. Three have already been launched (El Salado, Trujillo, Bojayá).



> Complementarity

States have the inherent responsibility of delivering justice to its citizens. Colombia therefore has assumed, with responsibility, its duty of investigating and prosecuting those responsible for committing serious crimes. It has done so by constantly enhancing the capacity and effectiveness of the ordinary criminal jurisdiction, and by implementing a complementary transitional justice process (Justice and Peace Law) with the aim of ensuring the rights to truth, justice and reparations for victims, while at the same time seeking reconciliation for a country long affected by violence. Furthermore, Colombia became a party to the Rome Statute convinced of the importance of having a last-resort mechanism to ensure that serious crimes will not remain impune.

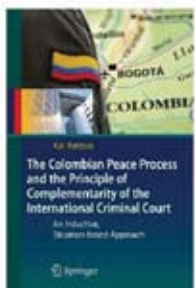
Colombia's Judiciary: assuming its responsibility

Colombia has an independent judiciary led by the General Prosecutor and the Supreme Court of Justice. They are responsible for investigating and prosecuting serious crimes. Since 2005 a new and more effective accusatory system was implemented throughout the country.

In 2006, with the support of the EU and the Netherlands, the Government adopted the Policy for the Fight Against Impunity to help overcome the obstacles faced by criminal investigations related to human rights and IHL violations.

With regards to the Justice and Peace jurisdiction, the Office of the Prosecutor General has increased its staff from 295 in 2005 to 1,060 in 2009. Likewise the budget has increased from USD\$1.8 million to USD \$7,4 millions in the same period. 195 accusations against individuals have been filed for trial.

The Supreme Court of Justice has carried out investigations against political accomplices of illegal groups and has imposed numerous sentences for up to 40 years of prison. They are investigated through the ordinary jurisdiction and are not entitled to any type of benefits.



Colombia's peace process and ICC's complementarity
Professor Kai Ambos (Göttingen University) recent independent study about Colombia's peace process and the ICC's complementarity principle.

Positive Complementarity : the ICC

The Prosecutor of the ICC has effectively promoted national proceedings against perpetrators of serious crimes by:

- Facilitating contacts with independent experts that have provided advice to the Colombian judiciary.
- Publicly denouncing the recruitment of child soldiers by the illegal armed group FARC.
- Requesting periodic information about the progress in the justice and peace investigations.
- Conducting visits to Colombia to meet with State officials, judges, prosecutors, NGOs, and victims.
- Making public the decision to analyze the allegations of international networks supporting armed groups committing crimes in Colombia.



ICC Prosecutor Luis Moreno Ocampo monitors an exhumation procedure in Colombia. Turbo Antioquia, 2008.

Photo: Isabel Cañaveril.

Positive Complementarity: international community

A significant number of States, international organizations and NGOs have been actively involved in justice-related initiatives. The Organization of American States has a mission responsible for monitoring the implementation of the justice and peace process with a view to ensuring victim's rights to truth, justice and reparation.

Countries such as Canada, Germany, Japan, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, and the USA support programs related to justice and victims.

Organizations such as IOM, Open Society Institute, Friederich Ebert Stiftung, OCHA, UNDP, and AVINA also provide assistance to similar initiatives.

Justice Rapid Response Mechanism (JRR)

As a member of JRR's Policy Group and Coordinating Committee, Colombia supports this mechanism designed to provide assistance to the ICC, the UN system and States by providing them with rapidly deployable criminal justice professionals trained in international investigations.



Former Prosecutor General, Mario Iguarán, ICC Prosecutor Luis Moreno Ocampo, Vice-president Francisco Santos, Minister of Foreign Affairs Jaime Bermúdez and Minister of the Interior and Justice, Fabio Valencia. August 24, 2008.

> Cooperation

Government's cooperation with the Office of the Prosecutor

- The Government of Colombia organizes regular working meetings with the Prosecutor to update him and his team on the country's current situation. Meetings have been held with the President, the Vicepresident, the General Prosecutor, the President of the National Commission for Reparation and Reconciliation, the Head of the OAS Mission in Colombia, and victims, among other high ranking officials.
- The Government provides periodic information about the progress in the implementation of the Justice and Peace Law and other relevant issues related with the fight against impunity.
- Specific information has been provided with regard to international arms trafficking networks and international financing and support of illegal armed groups.

Colombia's commitment to the ICC

- The Rome Statute entered into force on November 2002, following a Constitutional Reform. It has the highest legal authority and has been frequently referred-to in national jurisprudence. There is high public awareness of the ICC in the country.
- The National Congress adopted the Court's Agreement on Privileges and Immunities in 2007 (Law 1180).
- The Colombian Criminal Code incorporates an entire chapter on War Crimes.
- Colombia participates actively in the working groups of the Assembly of States Parties and currently coordinates the Group of Friends of the ICC in The Hague.
- Colombia has presented candidates for different posts at the ICC. Colombia's staff representation at the Court is high. Professor Eduardo Pizarro, President of the National Commission for Reparation and Reconciliation, is currently a member of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims.

Colombia's pledges at the Review Conference

- Colombia will continue to provide support and cooperation to the ICC in accordance to the provisions of the Rome Statute in a transparent, constructive, and efficient manner.
- Colombia will strive to investigate and prosecute crimes at the national level more effectively.
- Colombia will present to the National Congress the ICC Cooperation Bill.
- Colombia will continue to support positive complementarity initiatives such as the Justice Rapid Response Mechanism.

"Colombia considers the ICC as an ally in the fight against impunity in the understanding that it plays a complementary role to that of States, which are the main responsible for investigating and prosecuting serious crimes. The dichotomy is not between States and the ICC, but between States and the ICC on the one hand and perpetrators of serious crimes on the other."

Colombian intervention at the Consultative Conference on International Criminal Justice, New York 2009